



MINISTERIO
DE INCLUSION, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

SECRETARÍA DE ESTADO
DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y
PENSIONES



TOLEDO

**CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS A LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSS EN TOLEDO DURANTE EL
PERIODO DE 1 DE ENERO DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021,
SEGÚN EXPEDIENTE Nº 45/VC-18/21.**

En Toledo, a

De una parte:

D. Juan Carlos López Valencia, actuando como Director Provincial en Toledo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Entidad Gestora de la Seguridad Social creada por Real Decreto Ley 36/1978, de 16 de noviembre, dotada de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar; cargo para el que fue nombrado mediante acuerdo de nombramiento de 1 de junio de 2017, y en el ejercicio de las competencias que como órgano de contratación, y para la celebración de este contrato, le atribuye la siguiente disposición: Resolución de 18-02-2019 (BOE de 28-02-2019).

De otra parte:

D. Juan Carlos Martín Fernández provisto con Documento Nacional de Identidad 03863623Z y actuando en representación de la empresa AEMA HISPANICA S.L. legitimado para intervenir en este acto en virtud de las facultades conferidas en escritura otorgada ante el notario de Toledo D Nicolás Moreno Badía de fecha veintitrés de julio de 2003 y anotada con el nº2115 de su protocolo; siendo el domicilio de la empresa en la c/Rio Jarama 132 Local 10.01 de la ciudad de Toledo (45007), inscrita en el Registro Mercantil de Toledo al Tomo 1198 Libro 0 Folio 88 Hoja TO-19674 Inscripción 1; CIF:B45540846

Ambas partes se reconocen competencia y capacidad respectivamente para la suscripción del presente contrato.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PRIMERO.- La celebración de este contrato tiene amparo en el expediente administrativo nº 45/VC-18/21 cuyo presupuesto **base de licitación** ascendió a la cantidad (IVA **incluido**) de 117.147,48 euros, y que resultó aprobado con fecha 6 de julio de 2020.

El referido expediente se tramita con cargo al número económico 1391 213 39 del Presupuesto de Gastos del Instituto Nacional de la Seguridad Social para los años 2021 y 2022. La fiscalización previa de la aprobación del gasto tuvo lugar con fecha 6 de julio de 2020.

SEGUNDO.- La adjudicación del presente contrato, efectuada por procedimiento abierto, ha sido acordada con fecha 8 de octubre de 2020, por resolución del Órgano de Contratación que suscribe el presente documento contractual.

VENANCIO GONZÁLEZ 5
45001- TOLEDO
TEL.: 925 396657
FAX: 925 396726

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): LE1-d4c164da-17f93426-12c27e2b-ae0a59c9-75091ba7

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento administrativo electrónico archivado por la Dirección General de Patrimonio del Estado, según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, de 2 de octubre. Su autenticidad puede ser contrastada a través del siguiente enlace <https://contrataciondelestado.es/wps/portal/verificacionCSV>

Fdo. LOPEZ VALENCIA JUAN CARLOS - 500774073
Fecha de firma: 2020.11.10 10:29:56 CET

Fdo. 03863623Z JUAN CARLOS MARTIN (R: B45540846)
Fecha de firma: 2020.11.10 09:17:21 CET

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

PRIMERA.- El objeto del presente contrato lo constituye la ejecución de los servicios de mantenimiento de las instalaciones de los edificios adscritos a la Dirección Provincial del INSS en Toledo, que se describen en el pliego de prescripciones técnicas que se acompaña, en el que se han tenido en cuenta para su definición las consideraciones sociales, ambientales y de innovación.

SEGUNDA.- El contrato a que se refiere el presente documento tiene naturaleza administrativa, calificándose de servicios, y se registrará, además de por lo establecido en el mismo, por lo dispuesto en la ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP); por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, en todo lo que no se oponga a la citada ley; por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (en adelante, RGLCAP), en todo lo que no se oponga a ambos; por el resto de normas de desarrollo en vigor, concordantes y complementarias a aquélla, siempre que no se opongan a las normas citadas.

Con carácter supletorio se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado, siendo igualmente supletoria, en lo que al procedimiento se refiere, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y su normativa de desarrollo.

En ningún supuesto, el presente contrato supondrá la existencia de relación laboral entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el contratista ni con el personal a su servicio, por lo que, de conformidad con lo previsto en el artículo 308.2 del LCSP, a la extinción de este contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La empresa contratista será única responsable de las obligaciones laborales y de Seguridad Social relativas al personal que participe en la ejecución del contrato, tanto respecto de su personal como en su caso de las derivadas de la subcontratación que realice o de la cesión del contrato. En todo caso, responderá ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, al que mantendrá indemne de todos los daños, gastos, costes, perjuicios, indemnizaciones, sanciones o cualquier tipo de responsabilidades derivadas de sanción administrativa o de condena jurisdiccional motivadas por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por la empresa contratista en virtud de este contrato.

TERCERA.- La empresa contratista se compromete a realizar los servicios objeto del presente contrato, de acuerdo con los contenidos que figuran en los pliegos de cláusulas administrativas particulares y 2 prescripciones técnicas que han regido la

adjudicación, documentos que el contratista declara conocer y respecto de los cuales manifiesta su conformidad; considerándose, al efecto, y en cualquier caso, parte integrante del contrato.

Asimismo, la ejecución de los servicios se ajustará a la oferta económica y documentación técnica aportada por el adjudicatario al procedimiento de adjudicación, considerándose, a todos los efectos, incluidos en dicha ejecución, las eventuales mejoras o prestaciones adicionales que aquel haya incluido en su proposición.

En todo caso, salvo caso de error material o manifiesto, y sin perjuicio de las mejoras ofertadas, se establece la siguiente prelación en el supuesto de que surjan contradicciones de contenido entre los documentos que integran este contrato:

- a) Pliego de prescripciones técnicas (en adelante PPT).
- b) Pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP).
- c) Este documento de contrato.
- d) Proposición del licitador.

CUARTA.- El precio cierto de este contrato asciende a la cantidad de setenta y seis mil ochocientos noventa y ocho euros (76.898,00 euros IVA excluido), resultando de aplicación el detalle que a continuación se refleja en relación con el importe máximo del gasto comprometido:

- Importe del IVA aplicable (tipo del 21 %): 16.148,58 €
- **Cuantía máxima del gasto (IVA incluido) 93.046,58€**

Siendo su distribución de anualidades la siguiente:

Año 2021.	85.292,68
Año 2022	7.753,90

Se entenderá a todos los efectos que los precios reflejados en esta cláusula comprenden no solo el importe de ejecución de los servicios objeto de contratación, sino asimismo la totalidad de gastos que se definen en el PCAP y en el PPT como obligatorios para el contratista, encaminados a la ejecución total de la prestación que se describe.

Por lo que respecta al Impuesto sobre el Valor Añadido, el mismo se recoge de forma expresa como partida independiente, y así será repercutido en la facturación que se produzca, indicando el tipo impositivo aplicado, sin que el importe máximo del gasto sufra variación con el aquí recogido como consecuencia de la consignación del tributo.

QUINTA.- El plazo de duración de este contrato es de 12 meses a contar desde el 1 de enero de 2021.

Por lo que atañe a la posibilidad de prórroga, se estará a lo dispuesto en la cláusula 10.2 del PCAP, según la cual este contrato podrá ser prorrogado de forma expresa antes de su finalización, sin que la duración del contrato, incluidas las prórrogas, exceda de 24 meses, y considerando la necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de esta prestación, sin que las referidas prórrogas puedan ser concertadas aislada o conjuntamente por un plazo superior al fijado originariamente.

La/s prórroga/s se acordará/n por el órgano de contratación y será/n obligatoria/s para el contratista, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, o la última de las prórrogas acordadas. Se exceptúa de esta obligación de preaviso aquellos contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.

En el supuesto de que se produjera la prórroga, su inicio se computará **a partir del** primer día natural siguiente a la finalización del período de duración anterior; permaneciendo en vigor el contrato hasta el último día que se refleje en el acuerdo expreso de aprobación de dicha prórroga.

Sin perjuicio de lo anterior, y conforme con lo previsto en el último párrafo del artículo 29.4 de la LCSP, cuando al vencimiento de este contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar este contrato hasta que comience la ejecución del nuevo y en todo caso por un período máximo de nueve meses, sin modificar las restantes condiciones, siempre que el anuncio de licitación del nuevo contrato se haya publicado con una antelación mínima de tres meses respecto de la fecha de finalización de este contrato.

SEXTA.- En relación con la revisión de precios de este contrato, se estará a lo dispuesto en la cláusula decimoquinta del PCAP, según la cual atendiendo a la naturaleza de la prestación, y conforme a lo previsto en el artículo 103 de la LCSP no cabrá revisión del precio de este contrato, ni durante su plazo inicial de ejecución, ni en el caso de que el mismo se prorrogue.

SÉPTIMA.- Conforme a lo previsto en la cláusula 11.7 del PCAP, el contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la totalidad de su objeto; constatándose su realización conforme al contenido que se refleja en dicha cláusula.

OCTAVA.- El régimen de penalidades a aplicar a este contrato por cumplimiento defectuoso de la prestación o por demora en la misma, se ajustará a lo dispuesto en la cláusula 14 del PCAP que rige este procedimiento, en los términos siguientes:

En la ejecución de este contrato, se establecen las siguientes penalidades a aplicar por acuerdo del órgano de contratación, adoptado, previa audiencia al contratista, a propuesta del responsable del contrato; estableciéndose como límite a todas ellas, que la cuantía de cada una no puede superar el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de la mismas superar el 50 por cien del precio del contrato:

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para su realización, así como de los plazos parciales que en su caso se hayan señalado para su ejecución sucesiva.

El cumplimiento de los plazos por parte del contratista, tanto en lo que respecta a los plazos totales como a los parciales que hayan podido definirse, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 193 y 194 de la LCSP, estableciéndose, para el caso de que el contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto al cumplimiento de aquéllos, una penalidad diaria en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

El contratista está obligado a ejecutar el contrato conforme a la prestación pactada.

Para el supuesto de incumplimiento parcial o defectuoso de la prestación, se establecen las penalidades siguientes, en función de las circunstancias que asimismo se definen:

“Por parte del INSS, se verificará el cumplimiento de la ejecución de la prestación constatando la efectiva prestación del servicio en las jornadas y horarios que se especifican en el correspondiente anexo al pliego de prescripciones técnicas.

La constatación del incumplimiento parcial o total del servicio en una o varias dependencias conforme al programa de actuaciones previstas en el Pliego de prescripciones técnicas, motivada por la ausencia o retraso del personal en una o más jornadas de trabajo, facultará al INSS para dirigir al coordinador de la empresa el oportuno parte escrito en orden a la inmediata subsanación de la incidencia.

La constancia de dos partes en un mes, o de cuatro partes acumulados durante la ejecución del contrato, facultará al INSS para, previa audiencia al contratista, imponer a éste una penalidad equivalente al 10% sobre el total del importe mensual de adjudicación, en facturaciones posteriores.

Asimismo, el Instituto Nacional de la Seguridad social verificará regularmente la calidad de las tareas desarrolladas en los Centros objeto de este contrato, poniendo en conocimiento de la empresa adjudicataria las deficiencias que, en su caso, sean detectadas.

Las reiteradas deficiencias en la calidad de dichas tareas en cualquiera de los Centros objeto de este contrato, entendiéndose por tales la constancia de más de

dos advertencias escritas, sean sobre el mismo centro o afecten a varios individualmente, realizadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social a la empresa contratista, facultarán asimismo, previa audiencia de ésta, para la aplicación de una penalidad equivalente al 10% sobre el total del importe mensual de adjudicación, en facturaciones posteriores.

Las penalizaciones anteriores podrán acumularse tantas veces como se produzcan, sin perjuicio de la facultad de resolución que le asiste al INSS en base a lo previsto en la cláusula decimoséptima del PCAP que rige esta contratación.

De conformidad con lo reflejado en las cláusulas 11.5 y 11.6 del PCAP que rige esta contratación, y conforme a lo dispuesto en los artículos 201 y 202 de la LCSP, en el caso de que el contratista incumpla las obligaciones derivadas de sus contenidos, se establece una penalidad del 3 % del precio del contrato (IVA excluido) por cada incumplimiento acreditado de dichas obligaciones, salvo que expresamente hayan sido definidas como causas de resolución contractual en cuyo caso podrá ser impulsado el procedimiento correspondiente; considerándose como una infracción grave, a los efectos establecidos en la letra c) del apartado 2 del artículo 71 de la LCSP.

De conformidad con lo reflejado en la cláusula 13.3 del PCAP que rige esta contratación, y conforme a lo dispuesto en el artículo 130.4 de la LCSP, en el caso de que el contratista incumpla las obligaciones de información en relación con la subrogación de los trabajadores prevista en una norma legal, en el convenio colectivo de aplicación, o en un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, o cualquier circunstancia derivada de las mismas, se establecen la penalidad siguiente:

Si el contratista incumple en más de 10 días hábiles el plazo que haya establecido el Instituto Nacional de la Seguridad Social para facilitar la información a que se refiere el último párrafo de la cláusula 13.3 de este pliego, o incumple durante dicho plazo cualquier circunstancia relacionada con la obligación que en materia de subrogación le compete, se fija una penalidad equivalente al 3 por 100 del importe del contrato por cada período de 10 días que transcurra manteniéndose el incumplimiento, sin perjuicio de la facultad de resolución que se establece en la cláusula 17.2.3 del PCAP que rige la contratación.

NOVENA.-

Las condiciones para el pago del precio del contrato se ajustarán a lo dispuesto en la cláusula 12.1 del PCAP, según la cual el pago del precio se producirá por mensualidades vencidas, estando obligado el contratista a presentar las correspondientes facturas en tiempo y forma y por el importe que proceda, en el Registro de la Entidad o en cualquiera a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de treinta días desde la ejecución del servicio, conforme a las indicaciones contenidas en la cláusula 12.2 del PCAP.

Sin perjuicio de lo anterior, las entidades relacionadas en el artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, estarán obligadas a expedir

y remitir facturas electrónicas, salvo que, atendiendo a su importe o por tratarse de servicios realizados en el exterior, reglamentariamente se haya excluido dicha obligación.

Las facturas electrónicas se presentarán en el punto general de entradas de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, (<https://face.gob.es/es/>), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, debiéndose hacer constar también en dicha factura las menciones a que hace referencia la cláusula décima de este contrato, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 de la citada ley.

En los supuestos en los que resulte obligatoria la expedición y presentación de factura electrónica, no se entenderá cumplida dicha obligación aun cuando la entidad o el proveedor presente otro tipo de facturas en formato distinto; no iniciándose, en consecuencia, el cómputo del plazo para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social efectúe el pago ni el devengo de los intereses, en su caso. En tales supuestos, se procederá a la devolución de la factura por defecto de forma, indicando los aspectos mencionados a fin de que se emita la factura en el debido formato electrónico.

DÉCIMA.-

El Registro administrativo al que dirigir la/s factura/s, y los datos a hacer constar en la misma, son los que se reflejan en la cláusula 12.2 del PCAP:

Domicilio (sede del órgano encargado de gestionar la factura) C/ Venancio González 5

Denominación del órgano de contratación: Director Provincial del INSS en Toledo

Denominación del órgano destinatario de la prestación: Dirección Provincial del INSS en Toledo

NIF: Q4519001D

Expediente nº: 45/VC-18/21

Órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad: Conforme a lo previsto en el art. 125.3 de la ley general Presupuestaria, la dirección de la contabilidad pública en el ámbito de la Seguridad Social corresponde a la Intervención General de la Seguridad Social, ejerciendo dicha competencia, por lo que respecta a este contrato, a través de la Intervención delegada de la Seguridad Social en Toledo.

Facturas electrónicas: Los códigos Dir3 de identificación de la Unidad encargada de gestionar la factura son los siguientes:

Centro Gestor:	EA0042131
Unidad Tramitadora:	EA0042187
Oficina contable:	EA0042287

UNDÉCIMA.- Sin perjuicio de los supuestos previstos en la LCSP sobre sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, este contrato sólo podrá modificarse, de acuerdo con lo establecido en el artículo 203 de la LCSP, bajo las condiciones y procedimiento previstos en la cláusula 16.1 del PCAP, conforme a la cual sin perjuicio de los supuestos previstos en la LCSP sobre sucesión en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y ampliación del plazo de ejecución, este contrato sólo podrá modificarse en los casos y con los límites establecidos en el artículo 205 de dicha ley, no fijándose en este documento condición ni procedimiento alguno que posibilite la aplicación de lo previsto en el artículo 204 de la misma.

DUODÉCIMA.- En relación con el plazo de garantía aplicable a este contrato, se estará a lo dispuesto en la cláusula 12.3 del PCAP, según el cual atendiendo a su naturaleza, este contrato se exceptúa de plazo de garantía.

DECIMOTERCERA.- Las causas de resolución de este contrato son las consignadas en los artículos 211 y 313 de la LCSP, y asimismo, las que de forma específica, se citan en la cláusula 17.2 del PCAP.

DECIMOCUARTA.- El contratista estará obligado a guardar sigilo respecto a los datos o antecedentes que, no siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga conocimiento con ocasión del mismo.

Esta obligación, se hace expresamente extensiva al personal que emplee en la ejecución del contrato, y con ocasión de la documentación o información de la que aquél pueda tener conocimiento como consecuencia de la prestación de los servicios en las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social, debiendo guardar absoluto secreto en relación con dicha documentación o información.

En todo caso, el contratista asume la obligación de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, resultando de aplicación las previsiones contenidas en la disposición adicional vigésima quinta de la LCSP, y en lo que respecta al deber de confidencialidad, las establecidas en el artículo 133 de dicha ley.

De forma específica, el adjudicatario quedará obligado al cumplimiento de **todas las obligaciones legales en materia de protección de datos de carácter personal establecidas por la normativa vigente, y particularmente en lo establecido en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa de aplicación y desarrollo, conforme al contenido previsto en la cláusula decimoctava del PCAP.**

DECIMOQUINTA.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35.1.n de la LCSP, y conforme la previsión contenida en el artículo 201 de la LCSP, el contratista deberá cumplir con las obligaciones aplicables en materia medioambiental, social o laboral establecidas en el derecho de la Unión Europea y en el derecho nacional, así como con las normas y condiciones fijadas en el convenio que resulte de aplicación.

El incumplimiento de estas obligaciones, y de forma singular, los incumplimientos o retrasos reiterados en el pago de los salarios o la aplicación de condiciones salariales inferiores a las derivadas de los convenios colectivos que sea grave e imputable al contratista, dará lugar a la imposición de las penalidades a que se refiere la cláusula octava de este contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo con lo reflejado en la cláusula 13.5 del PCAP, la empresa contratista se somete a las siguientes reglas especiales respecto del personal que emplee en la ejecución del contrato:

Corresponde exclusivamente a la empresa contratista la selección del personal que formará parte del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato, sin perjuicio de la aplicación del convenio colectivo que resulte de aplicación.

La empresa contratista procurará que exista estabilidad en el equipo de trabajo, y que las variaciones en su composición sean puntuales y obedezcan a razones justificadas, en orden a no alterar el buen funcionamiento del servicio, informando en todo momento al Instituto Nacional de la Seguridad Social.

La empresa contratista asume la obligación de ejercer de modo real, efectivo y continuo, sobre el personal integrante del equipo de trabajo encargado de la ejecución del contrato, el poder de dirección inherente a todo empresario. En particular, asumirá la negociación y pago de los salarios, la concesión de permisos, licencias y vacaciones, las sustituciones de los trabajadores en casos de baja o ausencia, las obligaciones legales en materia de Seguridad Social, incluido el abono de cotizaciones y el pago de prestaciones, cuando proceda, las obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales, el ejercicio de la potestad disciplinaria, así como cuantos derechos y obligaciones se deriven de la relación contractual entre empleado y empleador.

La empresa contratista velará especialmente porque los trabajadores adscritos a la ejecución del contrato desarrollen su actividad sin extralimitarse en las funciones desempeñadas respecto de la actividad delimitada en los pliegos como objeto del contrato.

Según lo dispuesto en la cláusula 11.1 de este pliego, el contratista deberá designar un coordinador técnico o responsable integrado en su propia plantilla, que tendrá entre sus obligaciones las siguientes:

a) Actuar como interlocutor de la empresa contratista frente al Instituto Nacional de la Seguridad Social, canalizando la comunicación entre la empresa contratista y el personal integrante del equipo de trabajo adscrito al contrato, de un lado, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, de otro lado, en todo lo

relativo a las cuestiones derivadas de la ejecución del contrato.

b) Distribuir el trabajo entre el personal encargado de la ejecución del contrato, e impartir a dichos trabajadores las órdenes e instrucciones de trabajo que sean necesarias en relación con la prestación del servicio contratado.

c) Supervisar el correcto desempeño por parte del personal integrante del equipo de trabajo de las funciones que tienen encomendadas, así como controlar la asistencia de dicho personal al puesto de trabajo, procediendo inmediatamente a su sustitución, si fuera necesario, con objeto de garantizar en todo momento la continuidad de la prestación y su adecuada realización.

d) Organizar el régimen de vacaciones del personal adscrito a la ejecución del contrato, sin que en ningún caso pueda producirse menoscabo del servicio contratado como consecuencia de dicho régimen.

e) Informar al Instituto Nacional de la Seguridad Social acerca de las variaciones, ocasionales o permanentes, en la composición del equipo de trabajo adscrito a la ejecución del contrato.

La empresa adjudicataria responderá ante el INSS, al que mantendrá indemne de todos los daños, gastos, costes, perjuicios y pérdidas de cualquier tipo que pudiera tener o en los que pudiera incurrir como consecuencia de las reclamaciones de cualquier tipo, que pudieran originarse por el incumplimiento de las obligaciones establecidas bien a consecuencia de la actuación de la empresa y de su personal como de las empresas y personal que haya subcontratado.

Por así deducirse de la propia naturaleza del servicio contratado, el contrato se ejecutará en las dependencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social que constituyen su objeto. En todo caso, el personal de la empresa contratista procurará alterar en el menor grado posible el normal desarrollo de los trabajos por parte del personal del INSS, disponiendo de lugares específicos y diferenciados de los espacios que ocupen aquéllos, para la recogida y el almacenamiento de enseres, y en su caso, el cambio de ropa de trabajo. Corresponde también a la empresa contratista velar por el cumplimiento de estas obligaciones.

El personal de la empresa contratista deberá prestar el servicio debidamente uniformado, con los distintivos que procedan en orden a su identificación como personal de dicha empresa.

Sin perjuicio de lo anterior, todas las personas que la empresa adjudicataria emplee para la ejecución de este contrato, se someterán a las normas de control y seguridad de las instalaciones que estén establecidas en cada Centro, especialmente las relativas a apertura y organización, protección contra incendios, prevención de riesgos y confidencialidad, asumiendo la obligación de realizar cuantas actuaciones o actividades resulten precisas al objeto de garantizar el debido cumplimiento del objeto contractual dentro de la estricta observancia de dichas normas.

DECIMOSEXTA.- Según lo previsto en la cláusula 8.2 del PCAP, la empresa AEMA HISPANICA S.L. ha constituido a disposición del Órgano de Contratación del Instituto Nacional de la Seguridad Social una garantía definitiva por importe de 3.844,95 €.

Dicha garantía definitiva, estará afecta a las responsabilidades descritas en el artículo 110 de la LCSP, y no será devuelta o cancelada hasta que se haya producido, en su caso, el vencimiento del plazo de garantía y cumplido satisfactoriamente este contrato, en los términos recogidos en el artículo 111 de dicho texto legal.

DECIMOSÉPTIMA.- Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, efectos y resolución del presente contrato, serán resueltas por el órgano de contratación. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las controversias que surjan entre las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la LCSP.

Para la debida constancia de todo lo convenido, se firma este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha señalados “ut supra”.

POR EL INSTITUTO NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL,

Juan Carlos López Valencia

POR EL CONTRATISTA,

Juan Carlos Martín Fernández